

Guerra Civil en El Salvador, un conflicto histórico por la tenencia de la tierra

Por: Yudy Ivette Montoya Blanco

yudyvet@gmail.com

Maestría en Comunicación Desarrollo y Cambio Social

Universidad Santo Tomás

Resumen

El Salvador es un país centroamericano que desde la época de la colonización española ha vivido continuos conflictos políticos, sociales y económicos causados por la disputa de la tenencia de la tierra, conflictos que desencadenan la guerra civil que inicia de manera formal a inicios de los años 80 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el ejército gubernamental apoyado por Estados Unidos. Este conflicto no solo se desarrolla con la confrontación bélica, la comunicación también se instrumentaliza como un arma de guerra para y entre cada una de las partes del conflicto, al igual que juega un papel importante en el posconflicto luego de los Acuerdos de Paz, a través de la memoria.

En el siguiente texto se evidenciará entre comunicación, memoria y paz en el conflicto salvadoreño comprendido entre 1980 y 1991, y en el posconflicto luego de la firma de los Acuerdos pactados en 1992.

Palabras claves: conflicto, posconflicto, memoria, comunicación, paz.

Abstract

El Salvador is a Central American country that since the time of the Spanish colonization has experienced continuous political, social and economic conflicts caused by the land tenure dispute, conflicts that trigger the civil war that formally begins at the beginning of the years 80 between the guerrilla of the *Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional* and the government army supported by the United States. This conflict not only develops with the warlike confrontation, communication is also instrumentalized as a weapon of war for and between each of the parties to the conflict, just as it plays an important role in the post-conflict after the Peace Accords, to through memory

The following text will show between communication, memory and peace in the Salvadoran conflict between 1980 and 1991, and in the post-conflict after the signing of the Agreements agreed in 1992.

Keywords: conflict, post-conflict, memory, communication, peace.

Introducción

La información que aquí se expone corresponde a una revisión documental descriptiva sobre el contexto del conflicto armado que vivió El Salvador durante los años 1980 y 1992 y el tiempo inmediatamente después de la firma del Acuerdo de Paz. Esta revisión se articula al proceso adelantado en el proyecto de investigación titulado: “Comunicación, memoria y paz, fase I”¹, de la que hice parte, bajo la estrategia de formación de recurso humano.

Esta investigación se propone reconocer y analizar la relación entre comunicación, paz y memoria en la experiencia de posconflicto de El Salvador, a partir de una exploración documental, para identificar las debilidades, fortalezas y aprendizajes que puedan contribuir al proceso colombiano de posacuerdo.

Es un trabajo que se propone realizar un análisis crítico en torno al reconocimiento de las particularidades del conflicto y proceso de paz, caracterizar las relaciones entre comunicación – paz – memoria identificando debilidades, fortalezas y aprendizajes en publicaciones especializadas sobre el proceso de posacuerdo, además de establecer puentes para la segunda fase del proyecto.

Esta revisión es relevante por el momento histórico que vive Colombia, un país que ha puesto fin a una guerra de más de 50 años a través de diálogos y acuerdos pactados, que más allá de silenciar fusiles, buscan emprender cambios estructurales que reduzcan las causas estructurales del conflicto como la desigualdad y el despojo. En ese sentido, el caso de El Salvador puede servir de espejo para Colombia (guardadas las proporciones), teniendo en cuenta que son países latinoamericanos que comparten similitudes en las causas

¹ Investigación adelantada por Elssy Yamile Moreno Pérez e Ibeth Johana Molina Molina, docentes de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de la Universidad Santo Tomás, en el marco de la convocatoria institucional de investigación, FODEIN 2018.

de los conflictos armados y sociales que en cada país se han desarrollado, además del proceso de diálogo y posconflicto que se tiene lugar en condiciones semejantes. Se busca entonces enriquecer la investigación con este estudio de caso, y así aportar desde la academia, como un actor también responsable de la construcción de paz, para reducir las posibilidades de repetir errores propios y los que se hayan podido cometer en casos semejantes.

Este trabajo se inscribe en la línea de Comunicación, Gobierno y Ciudadanía, la cual abarca investigaciones que generen conocimientos teóricos en cuanto al aporte de la comunicación en el ámbito de lo público y las diversas expresiones culturales y de identidad de los entornos sociales; también acoge la línea de Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, en tanto, contempla mediante los estudios teóricos sobre la comunicación y su articulación con las expresiones sociales que se manifiestan en función de comprender y transformar las dinámicas territoriales. En términos metodológicos se realizó una investigación documental que tiene un enfoque histórico-hermenéutico, de tipo exploratorio y con una tendencia cualitativa.

Inicialmente, se realizará un acercamiento a los orígenes del conflicto desde la época de la colonización para desde allí comprender la causa estructural del conflicto de El Salvador, donde el despojo de tierras marcó la disputa entre quienes habitaban los territorios y quienes llegaron a imponer nuevas prácticas y culturas. Luego, se hará un breve recorrido por los distintos momentos que atraviesa el país y que van marcando de manera definitiva los aspectos claves que desencadenan la guerra civil y su posacuerdo, sin perder de vista la influencia de la comunicación y la memoria. De esta manera, se reconoce y analiza la relación entre comunicación, paz y memoria en el conflicto y posconflicto de El

Salvador, para culminar con los lugares de encuentro con el caso colombiano y enunciar las reflexiones finales que arrojan este artículo de revisión.

Conflicto en El Salvador

Época colonial

El Salvador, al igual que los demás países de centro y sur América, tienen una historia de colonización gestada desde el siglo XVI, determinante para entender los orígenes que estructuraron los conflictos sociales y armados que, en momentos posteriores de la historia, desarrollaron los pueblos invadidos por la monarquía española. Es por ello que para hablar del conflicto salvadoreño es necesario remitirse a centro América de mediados de los años 1500, cuando el nuevo orden social, político y económico fue determinante para el cambio de las condiciones de vida, la destrucción casi en su totalidad de la cultura y costumbres de los pueblos indígenas, el despojo y la esclavitud en lo que entonces se conocía como el Reino de Guatemala, administrada por el virrey de la Nueva España (1535 – 1821) (Ministerio de Educación de El Salvador, 1994; pág. 100)

Es justo en la apropiación del territorio, en el uso de la tierra y las formas de permanecer en ella en donde surge una de las causas estructurales del conflicto, alrededor de los tres siglos de dominio español marcaron profundas huellas en la cultura salvadoreña, a diferencia de las demás colonias de América. El Salvador no contaba con metales preciosos para unirse al sistema mercantil puesto en marcha desde aquella época, pero contaba con una fuerte tradición de siembra principalmente de cacao, producto característico de la región y representativo de la cultura indígena.

Es por esto que con la imposición de un sistema social en escalas jerárquicas de poderes según las categorías étnicas producto de las mezclas con negros traídos de África,

indígenas y españoles, la élite de criollos hacendados y españoles implementaron grandes extensiones de tierra para la siembra de añil obligando a negros e indígenas a trabajar en ellas, pues este colorante con gran demanda en Europa para la industria textil en la segunda mitad del siglo XVII, antes de la colonización se daba de manera silvestre pero luego sustituyó los cultivos tradicionales de cacao. Esta actividad económica reemplazó las tradiciones agrarias y sostuvo la vida colonial, tanto que el añil salvadoreño tenía gran reconocimiento en el imperio español.

En 1824 el Salvador se convierte en uno de los cinco Estados de la República Federal de Centro América, conformada además por Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, las precarias condiciones económicas y las disputas entre las antiguas provincias que buscaban mantener su independencia del régimen federal, provocaron dos guerras civiles entre sectores conservadores y liberales (1826 – 1829 y 1830 – 1842). Entre tanto en El Salvador, las condiciones de trabajo se agudizaron en las plantaciones de añil debido a la necesidad de compensar las pérdidas provocadas por las guerras internas, puesto que los hacendados criollos mantuvieron sus negocios con estos cultivos a costa del trabajo y de las tierras de indígenas, ladinos y mestizos:

Por lo tanto, “Después de la independencia, los indígenas, los ladinos y los mestizos pobres de El Salvador quedaron a merced de las ambiciones de los terratenientes criollos. Estos aprovecharon la nueva libertad para apoderarse de las tierras comunales de los pueblos, amparados en un decreto que legalizaba la expropiación de la tierra no adjudicada o no cultivada. Se desconoce, sin embargo, la cantidad de tierra expropiada a los indígenas” (Ministerio de Educación de El Salvador, 1994; pág. 160)

Este contexto, sumado a los reclutamientos forzados, provocó sublevación y revueltas populares, quedando en la historia de El Salvador grabado el nombre de Anastasio

Aquino, indígena que en 1833 encabezó la insurrección de los nonualcos (Menjívar L, 2016) y quien hasta estos días, simbolizaba la dignidad y lucha por la tierra del pueblo salvadoreño.

Hacia los años 40 del siglo XIX y tras varios intentos de los Estados miembros para mantener la unión, acababa la República Federal de Centro América e iniciaba un periodo de disputas por el poder entre conservadores y liberales, lo que condicionaba la caída de los cultivos de añil y el nacimiento de una nueva élite que impulsaba el cultivo de café como principal actividad económica de El Salvador. Para los años 1881 y 1882, la Asamblea Legislativa en cabeza de un gobierno liberal, decretó leyes para abolir las tierras comunales y venderlas a particulares, marcando de manera determinante nuevas formas de despojo y profundizando aún más el conflicto de la tenencia de la tierra, oficializando así la Ley de Extinción de Comunidades.

De esta manera se considera que “la indivisión de los terrenos poseídos por comunidades, impide el desarrollo de la agricultura, entorpece la circulación de la riqueza y debilita los lazos de la familia y la independencia del individuo (...) que tal estado de cosas debe cesar cuanto antes, como contrario a los principios económicos, políticos y sociales que la República ha aceptado" (Larin, 2016; pág. 56)

Época de la República cafetalera

Con las leyes que privatizarían el uso de la tierra, a finales del siglo XIX (1870-1900), se instaló en El Salvador la República agraria con el fin de implementar la minería y los cultivos de café como nuevas actividades económicas para impulsar las áreas rurales, para beneficio y promovidas por una nueva élite que surge de distintos sectores sociales. Esta nueva elite de productores y empresarios, buscaban las oportunidades que brindaba el

mercado de la exportación para así mismo promover el mercado interno (Ministerio de Educación de El Salvador, 1994; pág. 10).

Luego de la apropiación de tierras por la corona española, quedo una fuerte política de acumulación por parte de las élites que asumen el poder y los empresarios, basada en el modelo económico liberal, dirigido a promover y defender la propiedad privada, el libre mercado y todas aquellas iniciativas empresariales que impulsara este modelo, en una clara lógica de latifundio y concentración de poderes políticos y económicos que generó desde entonces una profunda crisis de desigualdad y pobreza en la población rural, sustentada en políticas de gobierno que condicionaban el uso del suelo y la tenencia de la tierra.

Se basa la economía salvadoreña y el uso de la tierra en la producción y exportación de café, sin embargo, tanto empresarios como pequeños y medianos productores diversificaron sus cultivos, aun así, las apuestas por impactar de manera significativa la economía y lograr la apertura a mercados extranjeros no fue como se esperaba. El despojo de tierras y la falta de una apuesta clara dirigida hacia la financiación y soporte técnico para los pequeños y medianos productores, provocó un contrapeso para el fortalecimiento de la economía nacional y contradijo los argumentos en los que basaron la implementación de estas medidas, pero a su vez, beneficiaba a la clase política y empresarial específicamente (Ministerio de Educación de El Salvador, 1994; pág. 15), pese a los intentos de pequeños propietarios de adaptarse al cultivo, los requerimientos de la producción cafetera se sumaron a la problemática que ya se presentaba por la escasez de tierra y la forma de propiedad. (Gordon, 1989, pág. 19)

Las reformas liberales puestas en marcha a finales del siglo XIX que privatizan el uso de la tierra agravan las condiciones de vida de la población rural, campesinos e indígenas empezaron a mostrar su inconformismo, por lo tanto, germinan importantes

conflictos entre esta población y el Estado, origen de la guerra que se desataría en el siglo que estaba por iniciar.

Dictadura militar y surgimiento de movimientos de izquierda

Para los inicios del siglo XX, los beneficios económicos de la comercialización del café se vieron reflejados en una parte de la población, las principales ciudades se vieron favorecidas principalmente con obras de infraestructura y desde allí, se empezaron a apoyar los procesos industriales y la apertura de El Salvador a la visión de desarrollo al vinel de los países europeos. Otra parte de población, por el contrario, vivía en constante preocupación por el nivel de marginalidad que cada vez se profundizaba con el modelo económico liberal, el cual ampliaba cada vez la brecha social y económica entre la población urbana y rural; en este contexto, surge el Partido Comunista Salvadoreño influenciado por el modelo marxista. La crisis financiera de 1929 de Estados Unidos que también afectó el sistema financiero de Europa produjo fuertes golpes, por ende, cesa la importación de estos países de materias primas y productos provenientes de países pobres. El Salvador, cuyo principal producto de exportación era el café resultó gravemente afectado.

Es así como “Entonces llegó el año de 1929. Aún antes de la gran crisis, los precios del café habían comenzado a descender. En los primeros meses de 1930, la tendencia a la baja de precios se agravó y muchos de los productores prefirieron que la cosecha de ese año se pudriera en los árboles. Todo el país se inundó del dulzón olor a grano de café podrido. Como muchas de las fincas o plantaciones de café se encontraban hipotecadas, a menudo los propietarios perdieron sus tierras. Durante los primeros años de la depresión cambió de manos el 28% de las propiedades cafetaleras del país, siendo generalmente más afectados los pequeños productores” (Thomas, 2001; pág. 67)

Las políticas de Estado de privatización de la tierra del siglo XIX, sumado a las hipotecas derivadas de la crisis financiera de inicios del siglo XX, provocó fuertes inconformismos en el sector popular y campesino de El Salvador, especialmente en el occidente del país donde se ubican las plantaciones de café. Allí, el Partido Comunista se fortaleció al trabajar de la mano de organizaciones campesinas e indígenas afectadas por la crisis, a los que también se sumaron movimientos estudiantiles y sindicalistas de las ciudades, alcanzando una gran fuerza para convocar movilizaciones y acciones de protestas ante las profundas desigualdades sociales, a la par que surgían importantes liderazgos como es el caso de Farabundo Martí (Productora Periodista Libre, 2016).

En cuanto a la participación política, durante los gobiernos de Meléndez – Quiñones los indígenas habían alcanzado el control de las alcaldías en el occidente de El Salvador, pero con la dictadura militar al mando de Maximiliano Hernández Martínez (1931 – 1944), quien llegó al poder tras un golpe de Estado, las dinámicas políticas cambiaron, su dictadura se caracterizó por las fuertes medidas represivas ante los brotes de rebelión mediante el poder y capacidad de acción de sus fuerzas militares y cuerpos de seguridad, éstos últimos, principales guardianes de las grandes haciendas.

En la dictadura de Hernández Martínez (1931 – 1944), se dio lugar a lo que se denominó como el primer alzamiento popular de América Latina impulsado por el Partido Comunista, levantamiento gestado desde la unión de campesino e indígenas en una digna acción de rebeldía e insumisión a la clase gobernante. La reacción del gobierno fue inminente, los investigadores e historiadores la catalogan como etnocidio, “las tropas gubernamentales iniciaron la eliminación sistemática de miles de personas, en su mayor parte indígenas y campesinos, que parecían sospechosos de haber participado en el alzamiento o de ser simpatizantes” (Fuentes, 2004; pág. 34). El gobierno militar utilizó

todas sus fuerzas representadas en tropas, armamentos y grupos de apoyo contra indígenas y campesinos armados con palos y machetes, el ataque fue de tal magnitud, que Hernández Martínez rechazó los ofrecimientos de ayuda internacional.

Posteriormente al levantamiento, el gobierno implementó medidas con las que pretendía mitigar las causas de las rebeliones a través del Fondo de Mejoramiento Social y la Junta Nacional de Mejoramiento Social (1932), con los objetivos de mejorar la vivienda, facilitar la industria y redistribuir la tierra. Debido a la magnitud de la problemática, estas medidas no fueron suficientes, además, por repetir los errores históricos como falta de una asistencia técnica y apoyo financiero, lo que frustró la posibilidad de hacer posible una verdadera reforma agraria. Las medidas represivas para controlar políticamente a la población fueron constantes, se decretó el estado de sitio y se destinó gran parte del presupuesto para el Ejército, institución central del Estado. La Ley Orgánica (1934) y la Ley Agraria (1942), mantuvieron vigilada de cerca a la población campesina y restringieron sus derechos civiles. (Ministerio de Educación de El Salvador, 1994; pág. 131)

Tras el golpe de Estado de militares inconformes a la dictadura militar de Maximiliano Hernández Martínez en 1944, continúan en el poder las fuerzas militares sin mayor novedad más que la Constitución de 1950 que propicia lo que se denomina como la modernización social y económica de El Salvador, ola que se venía gestando en toda la región luego del final de la Segunda Guerra Mundial. Pese a las estrategias del gobierno por superar las crisis económicas y sociales que se venían acumulando desde hace décadas, miles de salvadoreños migraron hacia Honduras desde principios del siglo XX, en busca de superar las problemáticas del sistema agrario de su país, ocasionando nuevas dificultades con sus vecinos; la Guerra de las cien horas (1969) tuvo un alto costo para El Salvador, pérdidas humanas y económicas. El país gastó al menos la quinta parte de su presupuesto anual, por lo que en los siguientes años se recaudó para compensar los gastos de la guerra, profundizando aún más la presión social.

Con la Revolución Cubana en gesta al mando de Fidel Castro, América Latina se convirtió en cuna de nuevos movimientos guerrilleros. Mientras en las montañas del sur del Tolima, Colombia, nacían en 1964 las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC – EP) (Guaraca J, 2015), movimiento revolucionario de carácter político militar; quince años más tarde, en 1979, nacía en El Salvador el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).

De acuerdo a lo planteado por Juárez (2014), una aglutinación de cinco guerrillas, hasta entonces las más importantes del país con orígenes rurales de sectores campesinos, y urbanos principalmente sindicales y estudiantiles, todos producto de disidencias de antiguos partidos. Estas guerrillas fueron: las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y el Partido Comunista Salvadoreño - Fuerzas Armadas de Liberación (PCS-FAL).

La Guerra Civil 1980 – 1992

Con los importantes acontecimientos de conflictos sociales y políticos de los años 70 bajo dictaduras militares, la Guerra Civil de El Salvador inicia en 1980 con la Junta Revolucionaria de Gobierno como dirigente de la nación, este conflicto se desarrolla en al menos 8 departamentos del país: San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Vicente, La Paz, Morazán y Usulután. Con la idea de lograr una insurrección popular, el FMLN tuvo más acogida en las áreas rurales por sus bases políticas históricamente organizadas en el campo, resaltando también las tomas y saltos a cuarteles y puestos militares, además de las tomas en un número importante de poblaciones y ciudades. Además, el apoyo logístico, adiestramiento y armamento ligero de Cuba y Nicaragua – entre otros países – donde se había alcanzado la victoria de grupos insurgentes.

De esta manera, el conflicto toma una dimensión marcada inicialmente por una coalición revolucionaria que buscaba cambios estructurales en el ámbito económico, político y social, a contribuir a la lucha regional que desde Nicaragua se gestaba contra el imperialismo de Estados Unidos (Gordon, 1989), lo que denota cierta homogeneidad en los conflictos de los países latinoamericanos cuya historia está marcada inicialmente por el colonialismo, y luego desencadena en estrechas relaciones entre Estado – empresa privada de la agroindustria contra el pluralismo de clases obreras, campesinas y populares. Su coordinación y fuerza militar fue evidente ante las Fuerzas Militares del Estado, por lo que éstas últimas recibieron ayudas con armamento y asesoría militar de parte de Estados Unidos bajo el mandato del presidente estadounidense Jimmy Carter.

Sin duda el apoyo de la población civil fue significativa, mientras se desarrollaba el conflicto armado, en importantes centros urbanos las movilizaciones sociales generaban huelgas y manifestaciones en contra de la represión del Estado y en rechazo al apoyo de Estados Unidos a la guerra, además. El FMLN invita a la ciudadanía a unirse en los Comités de Defensa Popular y a prepararse mediante el almacenamiento de provisiones para los días más duros de la guerra. Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno nacional son desmedidas, la violación de derechos humanos aumentó de formas alarmantes (Martín Baro I, 1981).

Fue así como grupos armados de vigilancia privada y personal de apoyo hacían parte de la estrategia, lo que propició la conformación y accionar de prácticas paramilitares ultraderechistas que dispararon altos índices de opresión y exceso de fuerza con la población civil, no solo en el tiempo de la guerra, sino posteriormente en el periodo del posconflicto, con el objetivo de detener todo brote de alzamientos populares y mantener una idea de democracia representativa.

En la década de los 80, se estimaba que la población de El Salvador oscilaba entre los 4,5 millones de habitantes, la guerra civil comprometió alrededor de 75.000 pérdidas humanas, de las cuales 60.000 de los muertos fueron civiles, lo que significó la disminución de un 2% de la población a causa del conflicto. Así mismo, los cálculos arrojan aproximadamente 8.000 desaparecidos, 12.000 mutilados víctimas de las minas antipersonas, 1 millón de desplazados y 12.000 presos políticos. Cifras que superan los conflictos que El Salvador haya podido tener en toda su historia (Ministerio de Educación de El Salvador, 1994; pág. 229)

La intervención norteamericana tenía como objetivo implementar proyectos políticos, económicos y sociales de carácter reformista, las claras alianzas entre la potencia mundial y la oligarquía salvadoreña asentada en Miami marcaban un objetivo anticomunista, a través de la fuerza militar desmedida se encaminó el firme propósito de detener el proyecto político que el FMNL le proponía al pueblo salvadoreño, que como se ha mencionado anteriormente, hacia parte del plan latinoamericano que Cuba y Nicaragua proponían para la región de revertir el orden social impuesto por Estados Unidos (Martín Baro I, 1981).

El investigador Martín Álvarez A, resume el conflicto que desató la guerra civil de la siguiente manera: “El Salvador, un país centroamericano de economía agroexportadora; con una grave polarización social entre un pequeño sector dominante y propietario frente a grandes masas campesinas pobres y con una clase media urbana muy reducida; con bajos índices de desarrollo, y dominado por regímenes políticos excluyentes. En el primero, la movilización fue urbana y tuvo lugar entre 1966 y 1972, se siguieron los postulados cubanos en muchos aspectos y la experiencia concluyó con una grave derrota y la posterior regresión política del país; el fin de la dictadura militar dio paso a una nueva etapa democrática en la que la otrora guerrilla se insertó en el sistema con un rotundo éxito 24

años después. En el segundo, la movilización tuvo lugar desde 1970 hasta 1992, fue urbana primero y sobre todo rural después, y se alejó de los postulados cubanos para acercarse a aquellos más en boga a finales de los sesenta y principios de los setenta (Vietnam); el país afrontó a partir de 1980 una dura guerra civil que duró 12 años y finalizó con unos acuerdos de paz que dieron como resultado la inserción de la guerrilla en el sistema político y, 17 años después, su triunfo electoral” (Álvarez, 2016; pág. 56)

Lo anterior podría ubicarnos la categoría de conflicto en una situación de dominación de los grupos sociales con poderes económicos, políticos y militares, sobre otros grupos sociales cuya condición apunta a la desigualdad en el acceso a los recursos, condenándolos a ser quienes sostienen el sistema político, social y económico impuesto. También se interpreta el conflicto como una variedad de acontecimientos en la interacción del mundo urbano y sus ritmos (fuerzas militares y burguesía), con el conjunto de acciones desarrolladas en el mundo rural (organizaciones político – militares), influenciados por un contexto externo y una temporalidad que traía su propio ritmo, como lo fueron la revolución cubana y la caída del muro de Berlín (Juárez, 2014).

Luego de 12 años de conflicto, al interior del FMLN vinieron los balances y la autocrítica, reconociendo las divisiones internas, la desventaja en la guerra mediática que alcanzaba con éxito la mala propaganda y el asesinato a representantes de la iglesia jesuita en 1989 que ocasionó un descontento generalizado en la población, entre otros análisis. Por su parte, pese a que no hay un balance oficial por parte del gobierno nacional más allá del propagandístico donde siempre se declaró el control de la situación, la hambruna que sufría el pueblo salvadoreño y el alto costo de la deuda externa para financiar la guerra, fue el contexto que las partes tuvieron para iniciar los enumerados acercamientos que encaminaron el descenso de la confrontación bélica entre las partes (Martín Baro I, 1981)

Tras varios intentos de pactar la paz, el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el Gobierno de El Salvador en cabeza del presidente Alfredo Cristiani, firman el Acuerdo de Paz que dio fin a la guerra civil, con la intermediación de las Naciones Unidas y bajo la mirada del presidente de Estados Unidos George H. W. Bush.

El postconflicto en El Salvador

El proceso de paz de El Salvador atravesó varias dificultades, entre ellas, la solicitud inicial para que el ejército salvadoreño aceptara reducir su poder, se requirió de tiempo y el apoyo de países latinoamericanos que propiciaran mesas de negociación para así llegar a un acuerdo exitoso (Orozco A, 2005).

El 16 de noviembre de 1992 en Chapultepec, ciudad de México, se firma el Acuerdo de Paz de El Salvador, un acuerdo para que el FMLN y el gobierno de ese país cesara la guerra civil que dejó miles de víctimas y lograran la construcción de la paz a través de la reunificación social, la protección de derechos humanos y el desarrollo económico. El fin del conflicto armado salvadoreño se constituyó como un gran logro para la región teniendo en cuenta la alarmante cifra de 75.000 vidas humanas perdidas. Mediante estos acuerdos de paz, El Salvador buscaba alcanzar un Estado democrático reformado (Vilas, 1996). Fue así como se tuvieron en cuenta acuerdos políticos como:

- Acuerdo sobre Derechos Humanos firmado en San José el 26 de julio de 1990
- Acuerdo sobre Reformas Constitucionales firmado en México el 27 de abril de 1991
- Acuerdos de Nueva York I y II firmados el 25 de septiembre y 31 de diciembre de 1991.

Sin duda, este país ha tenido transformaciones políticas luego de la firma de los acuerdos debido a la reestructuración del Estado que lograron, una de las más importantes que se evidenció fue la transformación en materia de justicia transicional, la cual fue necesaria establecer dos meses después de haberse firmado el acuerdo. Inició promulgando la ley de amnistía general, aprobada de manera absoluta e incondicional, de manera que quienes integraban el FMLN ni quienes hacían parte del ejército fueran procesados y quedaran habilitados para hacer política. Según un informe realizado por Naciones Unidas, el 90% de los crímenes que se cometieron le correspondían a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de seguridad pública militarizados y a los llamados escuadrones de la muerte. El 10% restante, fueron atribuidos al grupo guerrillero (Pérez, 2010).

Según Martínez (2015), en los acuerdos no se discutieron asuntos sociales ni económicos, lo único concerniente a estos temas fue la decisión de crear el Consejo Económico y Social, sin embargo, éste no fue creado, la economía del país quedó en manos de la derecha tradicional quienes se ajustaron a las políticas neoliberales. Sumado a la no creación del Consejo, como lo establece el autor, en El Salvador no hubo un reconocimiento ni tan siquiera simbólico a las víctimas; fueron llevados algunos procesos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del 2005 salen las primeras condenas contra el Estado a través de sentencias de la Corte para reparar a las víctimas de manera económica y simbólica.

A quienes hicieron dejación de armas se les otorgó tierra, financiamiento, capacitación, asistencia técnica y becas. Sin embargo, las necesidades históricas de la población sobrepasaron los recursos destinados, además de la carencia de cultura agraria y la aridez de las tierras obligaron a algunos a abandonarlas; por esta razón, empezaron a vender lo que se les había asignado y un gran número de excombatientes terminaron en las ciudades en situaciones desfavorables. Esta situación fue determinante para la creación de grupos armados en los que se observaban antiguos miembros de la estructura guerrillera y

del ejército, que giraban en torno a propósitos criminales inmersos en negocios tales como el narcotráfico. Se podría establecer como una consecuencia al omitir la inclusión social dentro de los acuerdos, siendo ésta un proceso lento de construcción conjunta, en el cual se ven inmerso todos los actores de la sociedad, sectores públicos y privados (Martínez, 2015).

Por otro lado, los Acuerdos de Paz lograron la reducción de la Fuerza Armada de El Salvador, la eliminación completa de la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda; además, se transformó la Policía Nacional hacia la Policía Nacional Civil, en la cual se crearon instituciones supervisoras de derechos humanos y la incorporación de la guerrilla del FMLN al sistema democrático electoral como partido político, sin embargo, el desarrollo económico y social de todos los salvadoreños a partir del fin del conflicto armado, quedó fuera de toda área de negociación política (González L, 1999).

El postconflicto se ha caracterizado por convertir la doctrina como una fuerza estatal apolítica al servicio específico de la defensa de la soberanía de la República, no de la seguridad ni del orden interno con excepciones marcadas en la Constitución. Por lo tanto, se establece un nuevo régimen educativo de los miembros de la Fuerza Armada, con lo que se conformó un Consejo Académico que revisa que el cuerpo de contenidos académicos al que se sometió a los elementos del Ejército, no contengan tendencias político-ideológicas ni partidarias entre otras responsabilidades (RedCepaz, 2013).

Por consiguiente, los Acuerdos de Paz tienen como objetivo las reformas estructurales y legales con las que buscan sentar las bases para la reunificación de la sociedad salvadoreña, la construcción de la paz, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la prosperidad, insumos con los que pretenden ver reflejados el desarrollo económico y social de todos los salvadoreños (Ministerio de Economía de El Salvador, 2014).

Sin embargo, para el FMLN existen dos retos fundamentales: mantener el buen relacionamiento con el gobierno apoyando sus propósitos a través de las buenas gestiones

de los integrantes de su partido que pertenecen al gabinete gubernamental, y fortalecer su arraigo en los territorios; sus cuotas en Ministerios y en instituciones del Estado tienen el compromiso de cumplir de manera intachable sus funciones, para demostrar una manera honesta de gobernar y así abrirle nuevas posibilidades de ser gobierno (Merino J, 2013;pág. 175)

Posconflicto, comunicación y memoria

Bajo el discurso hegemónico basado en la reconciliación, consenso y unidad nacional, inicia el posconflicto en El Salvador; reconciliación de la sociedad salvadoreña, la consolidación de un Estado de Derecho y la democratización con un nuevo actor en la escena política sin el uso de las armas, todo como resultado de la salida política del conflicto producto del proceso de negociación. Un discurso que apela a lo común e incluyente, pero que a la larga solo resultó ambientando un posconflicto sin enfrentamiento bélico, pero con la misma crisis social provocada por la política de la clase gobernante.

Por lo tanto, “este discurso oficial es homogéneo solo en su forma de representación ideológica, su carácter unitario es simulado sobre la base de nociones comunes que los actores reproducen discursivamente, pero que no dan cuenta precisa de los imaginarios de los sectores populares de la guerrilla ni de los de una pretendida sociedad civil por la que el Gobierno habla. Se trata de un discurso oficializado desde élites de poder, por lo que resulta apreciable el sentido ideológico al describirlo como un “consenso nacional” (Salazar, 2012, pág. 161)

Las narrativas de experiencias del posconflicto salvadoreño registran una época tanto o más sangrienta que la misma guerra civil, una vez desarmado el Frente Farabundo Martí, las operaciones paramilitares se hicieron las prácticas por preferencia para tratar de contener nuevas organizaciones insurgentes.

En 1995, la Naciones Unidas declara como un éxito el acuerdo de paz en El Salvador, al tiempo que los niveles de violencia en el posconflicto superaban, incluso, la mortandad de la guerra. La institucionalidad salvadoreña reportó más de 7.800 homicidios, casi 140 por cada 100.000 habitantes, cifra aterradora que supera los cálculos oficiales durante los tiempos de la guerra (Moodie, 2012)

De manera simultánea, mientras los llamados escuadrones de la muerte impartían control social, los robos, asesinatos, violaciones y pandillismo se apoderaron de la sociedad salvadoreña y de lo cual no hay suficientes informes oficiales, por ello la importancia de relatar y construir memoria con quienes vivieron en carne propia lo ocurrido después de la firma de los Acuerdos de Paz. Tal como lo relata Ellen Moodie en “Es peor que la guerra”: historias de crimen y recuerdos de la guerra en San Salvador, donde a través de relatos populares, refleja una realidad conflictiva de inseguridad social luego de 1992, relatos que señalan que la ausencia de la guerra no necesariamente significa la consolidación de la paz: “Yo siento que quizás es peor hoy... La cuestión hoy con la delincuencia es que uno nunca sabe dónde están, ni quiénes son. Puede ser cualquier persona, puede ser en cualquier momento que lo asalten a uno, porque hoy, incluso estos de la delincuencia andan en carros último modelo, armados hasta los dientes, en carros polarizados, que de repente separan en una esquina y se ponen a asaltar. O sea, uno no sabe ni quién puede ser” (Moodie, 2012, pág. 243).

Las narrativas de los salvadoreños dan cuenta de las experiencias en la base social en la siguiente década luego de la firma de los acuerdos, quienes tienen el sentimiento generalizado de tiempos más difíciles que la misma guerra. Estos relatos se confrontan con los discursos oficiales, una suerte de memoria de la posguerra implantada desde los actores involucrados interesados en concebir una idea de paz y democracia; el gobierno crea nuevas institucionalidades que velaran por el cumplimiento y la legitimización de lo

pactado, el FMLN se constituye como partido político orientado a hacer oposición bajo la línea de la poliarquía para así generar las transformaciones necesarias para el cambio en El Salvador, un pacto entre los actores involucrados que al parecer dejó por fuera a la estructura social que siguió sus conflictos estructurales en tiempos de posguerra.

Un pacto de paz que lejos de traer las reivindicaciones y la equidad que exigían los movimientos sociales, políticos y populares, traía un contexto de pasividad propicio para fortalecer proyectos políticos fallidos durante la dictadura militar y un proyecto económico que beneficiara la agroindustria y el sector empresarial, entre tanto, el paramilitarismo y la delincuencia mantenían a la población en constante zozobra e intimidaciones.

Comunicación y Memoria

En los momentos más álgidos de la guerra, la propaganda e informativos fueron las herramientas más empleadas por las partes (Gobierno y FMLN). El movimiento insurgente contaba, entre otros medios, con una emisora clandestina de onda corta llamada “Radio Venceremos”, cuya transmisión se hacía desde las montañas de Morazán tres veces al día; además de expandir su mensaje revolucionario, era un medio alternativo para informar el desarrollo de la guerra y para denunciar los excesos y abusos por parte de las fuerzas armadas del gobierno. Esta emisora realizó sus emisiones durante los once años de la guerra civil, luego de la firma de los acuerdos, pasaría a ser legalizada en onda FM (Peña & Alvarado, 2014)

Entre tanto, el gobierno salvadoreño usaba los medios masivos de comunicación para mantener una aparente calma y control sobre la guerra, pero, sobre todo, para ocultar la grave situación de violación de derechos humanos contra la población y posicionar un mensaje de desarrollo próspero para el sector empresarial. Por ejemplo, en diciembre de 1981, efectivos de las Fuerzas Armadas produjeron uno de los actos más violentos de la

guerra, la masacre de El Mozote, donde fue ejecutada una comunidad rural entera. Los diarios de El Salvador priorizaron las noticias sobre el fortalecimiento de la industria privada, el apoyo recibido por parte de Estados Unidos para superar la crisis del país y registra ataque de “terroristas” contra bienes privados y la población civil (Salvador, 2017).

Este mismo caso ocurrido con la masacre de El Calabozo, San Vicente, en 1982, donde las Fuerzas Militares en una operación contraindurgente, bombardaron a la población civil mientras intentaban huir del ataque, los medios lo registraron como un golpe a la insurgencia y un contra ataque al comunismo. Resulta interesante encontrar el término “terrorista” en esta revisión a medios masivos, para referirse al grupo insurgente del FMLN, un discurso no muy distinto al utilizado actualmente en el contexto de las guerras de este nuevo siglo. Ejemplo de ello se registró en 1983 cuando el grupo guerrillero asaltó el puesto de la guardia nacional en Berlín, Usulután.

La imposición de mensajes claramente definidos para legitimar acciones en la guerra resulta ser la estrategia de comunicación de preferencia, el uso de la maquinaria y el poder de los medios masivos de comunicación se presta para generar el ambiente propicio para ello, quienes ejecutan la guerra con apoyo de los medios, pueden contar la historia según sus propios intereses. Sergio Salazar habla en Memoria y conflicto armado salvadoreño, de la “memoria oficial” como un mecanismo implementado por las élites sobre la sociedad, para dibujar una realidad distorsionada y acomodada, tanto para obviar lo que realmente sucedió, como para mantener ambientes de cambio y continuar con el control: “La memoria oficial de la paz/democracia se constituye así desde una política de memoria, e implica un olvido patriótico de las memorias colectivas que funciona hacia el futuro. El mito fundante de la “firma” como mecanismo de localización de esta memoria se proyecta desde su providencia como un mito progresista en el que la conflictividad social

desaparece o al menos queda contenida en la política (“nueva” institucionalidad, reforma y ley) y por lo tanto vuelve imposible la experiencia pasada, la vivencia cotidiana del conflicto” (Salazar, 2012, pág. 164)

Por lo tanto, es tan importante la construcción de memoria desde las otras voces que hicieron parte del conflicto; los relatos, el reconocimiento de las experiencias y la reconstrucción de los hechos hacen parte del proceso de cimentar la memoria colectiva que, de cuenta de las otras versiones, sobre todo para evitar la repetición de los sucesos.

Roque Dalton habla del “testimonio de cargo”, con el que rescata los testimonios directos de los sobrevivientes de las matanzas en medio de la guerra por medio de la denuncia, una urgente difusión de la realidad histórica que testimonia la vida de quienes en campo y ciudad a lo largo de Nuestra América, sobreviven diariamente en la constante lucha por la tierra, el alimento y los derechos fundamentales para alcanzar condiciones de vida digna. (Dalton R, 2007)

Guerra en Colombia, la tierra como botín en disputa:

Una confrontación armada con origen político – económico; por un lado los históricamente dominantes que a través de proyectos macroeconómicos adquieren poder y legislan para mantener este orden, y por el otro, los históricamente sometidos quienes con su mano de obra y trabajo en masa los sostienen y quienes se levantan a controvertir el modelo implantado, la historia lo ha clasificado en la confrontación entre anticomunistas vs. Antiimperialistas, derivado del conflicto histórico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En el caso concreto de El Salvador, confrontación que condujo la guerra civil entre el Estado a cargo de gobiernos de dictaduras militares y el Frente Farabundo Martí de

Liberación Nacional, conformado por distintas organizaciones políticas - militares de origen popular, desencadenada por un conflicto histórico derivado de la tenencia de la tierra, decenas de generaciones despojadas y sublevadas ante la incapacidad de un Estado para garantizar sus derechos.

En Colombia, principios del siglo XX en medio del ingreso masivo de industrias norteamericanas se afianzó el proyecto de sociedad capitalista en Colombia, con ello, se confrontaron dos ideas de sociedad: valoración de la propiedad de la tierra y, la construcción de una economía nacional con apoyo de desarrollos industriales y una fuerte clase media rural. Este último fue impulsado por dirigentes del partido Liberal entre los años 20 y 30, pero los intereses de las fuerzas políticas y las disputas del poder a mediados de siglo, terminó regresando al país a antiguas prácticas de trabajo en las haciendas.

El declive de las reformas liberales, las masacres, el asesinato de seguidores de las políticas de Jorge Eliécer Gaitán, incluso hasta su asesinato, dio paso a la implementación de un modelo agrario basado en el latifundio estimulado por el gran negocio del narcotráfico, el cual propició la regulación para la repartición de tierras, con alcances hasta de lo que hoy se conoce como la política de apropiación de baldíos para el desarrollo de grandes proyectos agrícolas, que han dejado a miles de campesinos sin tierra (Fajardo D, 2009).

Así pues, para los años 60, se abre paso a la primera Ley de Reforma Agraria, en pleno desarrollo del programa insignia para América Latina - La Alianza para el Progreso - en medio de la guerra fría, que revolucionó el país en torno a los debates por la compleja situación en la que se encontraba el sector agrario y la población rural, alertando a la dirigencia política y a los poderes económicos, de una eventual llegada de la revolución

comunista a Colombia. En medio de algunas confrontaciones rurales que aún persistían de la guerra bipartidista de los años 50 y del avance de autodefensas campesinas, nace el 1964 en Marquetalia la guerrilla campesina Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, bajo la dirigencia de Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda) y Luis Alberto Morantes (Jacobo Arenas).

La reforma Agraria del Frente Nacional (1962 – 1974), reunía el consenso de liberales y conservadores sobre la transformación de los tradicionales patrones de distribución de la tierra, que incluía elevar el nivel de vida y, la asistencia técnica y social para quienes habitaban el campo, para reducir los asalariados trabajadores de haciendas e incentivar el surgimiento de una sociedad de pequeños propietarios rurales, para así evitar la lucha de clases y mantener el orden social. Al entrar hacer los cálculos de los posibles predios expropiados, los pagos de las indemnizaciones y el gasto público sobre propiedades, el Congreso de la República detuvo el impulso reformista y la modificó de manera significativa (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016)

A los inconvenientes ya presentados, se sumó la influencia de observadores externos como el Banco Mundial y su Misión Curri, que, mediante la Operación Colombia, fue trinchera para los terratenientes del país que descartaron la viabilidad económica de pequeños y medianos campesinos, por lo que no sería rentable para la economía nacional el suministrarles tierra ni créditos, tal como se argumentó a finales del siglo XIX en El Salvador con la Ley de Extinción de Comunidades. A la par, la guerra contra insurgente no se hizo esperar, a través de la doctrina de seguridad nacional - que entre otras fortaleció la creación de grupos paramilitares - agudizó la represión estatal en las profundidades de la ruralidad no solo contra las guerrillas, el golpe militar también fue dirigido a las

organizaciones campesinas que se gestaron en medio de la inconformidad social. (Darío Fajardo. Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016)

En medio de la agitación social, se consolidó en Colombia la figura de campesino colono, no reconocido como sujeto de derechos, pero si identificado en los diferentes estudios sociales del país como el resultado del despojo de tierras, las masacres y el desplazamiento provocado por la guerra. Hacia los años 80 y 90, habiéndose firmado los Acuerdos de La Uribe entre las FARC y el presidente Belisario Betancur, el campesinado organizado toma como bandera la exigencia de la titulación de tierras y la inversión social en las regionales más apartadas, para mejorar sus condiciones de comercialización y su participación en la economía nacional, a quienes el Gobierno no asumió sus exigencias. Entre tanto, se exterminaba en su totalidad a un partido político de izquierda, la Unión Patriótica, apuesta política para la paz en la que convergieron guerrillas y movimientos sociales.

Los grupos armados privados tomaron fuerza desde los años 70, y a mediados de los 90 fueron facultadas de manera legal a través de las cooperativas de seguridad Convivir, a quienes se les atribuyó la tarea de expulsar a las comunidades rurales de sus territorios bajo todo tipo de violaciones a los derechos humanos, defendiendo a toda costo de la guerra, las grandes extensiones de tierra de los hacendados en Colombia. El narcotráfico crecía de manera acelerada, haciendo parte de las más altas esferas de la política nacional, exacerbando la guerra contra las guerrillas y justificando la intervención estadounidense a través de Plan Colombia y la extradición; el Estado perdía cada vez más su soberanía y libre determinación. Escenario dantesco que favoreció la llegada de la Seguridad

Democrática del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que en informes del gobierno fue presentado como un éxito, pero las Naciones Unidas reportaron el incremento del desplazamiento, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. La disminución de las operaciones militares de las distintas guerrillas, especialmente de las FARC, y la verdad pública destapada a través de la Ley de Justicia y Paz puso en evidencia la llamada parapolítica, produjo un cambio en el ambiente político que propició la negociación con las FARC. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016)

El periodo del posconflicto en Colombia apenas se está escribiendo, adelantados tres años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016 – Teatro Colón de Bogotá), la influencia de la clase gobernante tradicional gana las elecciones presidenciales en el 2018 con Iván Duque, respaldado por un partido de gobierno que nace desde la ideología y políticas neoliberales de Álvaro Uribe Vélez, con posiciones claras de cómo lo han denominado “hacer trizas el acuerdo” y que según analistas políticos, es Uribe Vélez quien gobierna a través del primer mandatario. En ese sentido, las políticas de gobierno de carácter neoliberal y militarista ya conocidas en pasados gobiernos se imparten de nuevo en los territorios con mayor fuerza, dificultando la implementación de los Acuerdos y dando continuidad a los conflictos que desde allí originaron la guerra.

La Fundación Paz y Reconciliación hace un balance cumplidos los dos años de la firma del Acuerdo, desde de sus conclusiones plantea, por un lado, el uso estratégico de la comunicación a través del lenguaje, donde las palabras *paz* es cambiada por la palabra *legalidad* y la palabra *postconflicto* es cambiada por *estabilización* con las que elaboran los mensajes más fuertes de su programa de gobierno. Por otro lado, pese a la disminución de los indicadores en relación al conflicto, el incremento de los homicidios en los municipios

donde tenía influencia las FARC y donde se ubican los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) - creados a partir de la firma del Acuerdo - registran muertes violentas de excombatientes en proceso de reincorporación, líderes sociales y reclamantes de tierras. (Valencia Agudelo L, 2018).

Pese al planteamiento del Acuerdo sobre los cambios estructurales necesarios para la consolidación de la paz, la continuidad del modelo económico neoliberal basado en la extracción de recursos naturales fuera del alcance de los grupos alzados en armas pero dentro de la lógica de desarrollo en función de los intereses económicos predominantes, constituye uno de los principales detonantes que perpetua los conflictos territoriales, considerando la pobreza extrema, el despojo y las profundas desigualdades sociales y económicas que deja como resultado para las comunidades que habitan los territorios explotados. En la lógica de superar los conflictos, cerrar la brecha socioeconómica y preservación de los ecosistemas, la implementación del Acuerdo Final de Paz y el alcance de nuevos acuerdos territoriales podrían significar la ruta más acertada para enderezar el buen avance del postconflicto (Coronado S & Ulloa A, 2016).

Consideraciones finales

En los contextos de guerra como el de El Salvador y el de Colombia, la historia de las naciones es contada desde las voces oficiales y autoridades nacionales, la cual es replicada por los medios masivos de comunicación con discursos esperanzadores de nuevos tiempos en paz, democracia y prosperidad, pero a su vez, cuestionando y señalando las consecuencias que el paso de la guerra ha dejado. Una guerra de la que los medios también hicieron parte al determinar los contenidos, los mensajes y sus intenciones, pero donde la memoria construida en colectivo se encarga de exaltar relatos y experiencias hechas desde el otro lado de esa versión oficial. Hoy Colombia transita el camino ya andado por El

Salvador, es por esto que se hace necesario voltear la mirada hacia el país centroamericano y reflexionar sobre sus errores y aciertos, comprendiendo las semejanzas que nos unen en cuanto a las causas estructurales del conflicto: la tenencia de la tierra.

Se entiende el posconflicto como una etapa que inicia en la firma del pacto de paz que finaliza con la confrontación y que posteriormente transita hacia una etapa de normalización, la cual supone que permite superar las principales causas que provocaron el conflicto; etapa que exige la transformación institucional, la generación de políticas que permitan el desarrollo social, la garantía de derechos, la equidad, la reconciliación y la apertura democrática para la partición política de los sectores sociales históricamente excluidos (Lederach J, 1998). El reto del posconflicto exige compromisos mayúsculos a nivel nacional y territorial atravesados por una intención real de reconciliación, el trabajo territorial pasa por atender el abandono del Estado que promovieron la violencia y las prácticas ilegales en las que se incurrieron para sobrevivir a las carencias; en el caso de Colombia el uso de las armas en la política, grupos armados ilegales, minería ilegal, cultivos con fines ilícitos, entre otras prácticas que al intentar dismantelar podría provocar nuevos brotes de violencia y disputas territoriales si las exigencias sociales no son debidamente asistidas (Valencia Agudelo & Ávila A, 2016).

De manera similar al caso salvadoreño, en Colombia se vive una fuerte ola de violencia luego de la firma del Acuerdo Final de Paz del 2016, más de 350 líderes sociales y casi 200 excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC han sido asesinados. La llegada en el 2018 de un gobierno que revive las prácticas guerrilleras de los años más crudos de la confrontación llena de incertidumbre las apuestas depositadas en las reformas y los cambios estructurales pactados en los Acuerdos firmados. “Hacer trizas los Acuerdos de Paz” es la consigna con la que se pretende detener el avance de la implementación de la paz y mantener la violencia con la que se han protegido los recursos de los poderes

económicos, estrategia que pone en inminente riesgo la protección de los derechos humanos, la defensa de los territorios y la vida de los líderes sociales; a su vez, el proceso de reincorporación de excombatientes a la vida civil se ha visto interceptada por conflictos territoriales, persecución política y desfinanciación (Ulloa A & Coronado S, 2016).

A pesar de haberse pactado la terminación de un conflicto de más de 50 años con la guerrilla de las FARC y de haber iniciado las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, este último gobierno ha insistido en destinar la mayor parte del presupuesto nacional en políticas de seguridad y defensa, que han provocado resultados negativos para la consolidación de la paz en el país; el resurgimiento de grupos disidentes, el aumento de los cultivos de uso ilícito, las ejecuciones extrajudiciales y la persecución sistemática a la movilización social. Además, las objeciones a las instancias creadas para el esclarecimiento de la verdad, como la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, de los hechos y responsables de las órdenes ejecutadas la guerra, como parte de una intención clara de proteger intereses de sectores con poder político, económico y militar en el país (Programa Somos Defensores, 2019).

La comunicación es contemplada en el Acuerdo Final a través del punto 6.5 en el que “se establecerán 20 emisoras en FM, de interés público, clase “C” mediante las cuales se busca principalmente hacer pedagogía de paz, pero más allá de este objetivo, la comunicación está llamada a propiciar diálogos diversos con temas centrales que atraviesan el posconflicto, la consolidación de la paz y la construcción de memoria exigen el trabajo y la responsabilidad de los medios de comunicación a través de mecanismos incluyentes y participativos (Ballesteros F, 2016).

Por un lado, explorando las causas más profundas de los orígenes del conflicto, cambiando el lenguaje de vencidos y vencedores, dando visibilidad a todos aquellos quienes hicieron parte del conflicto como actores o víctimas, reconociendo los intereses detrás de la confrontación; por el otro, propiciando los escenarios de planeación y ejecución

de políticas públicas de comunicación para la democratización de los medios y de la información (Arteaga Morales, Walteros Rangel, Álvarez Montoya, Andrade Becerra, Puentes Orjuela, Cortés Bernal & Baños López, 2012).

Bibliografía

Álvarez A (2016). Violencia y acceso al poder en América Latina: Uruguay y El Salvador.

Arteaga Morales, Walteros Rangel, Álvarez Montoya, Andrade Becerra, Puentes Orjuela, Cortés Bernal & Baños López (2012). Medios de comunicación y construcción de paz. Disponible en https://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/cuaderno2.pdf

Ballesteros F (2016). El proceso de paz en el salvador: un referente para Colombia.

Disponible en <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14198/1/TESIS%20PDF%20CON%20LICENCIA%20FREDDY%20B.%20.pdf>

Centro Nacional de Memoria Histórica (2016). Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas

Coronado S & Ulloa A (2016). Retos para la paz territorial. Disponible en https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=u7GnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=posconflicto+en+colombia&ots=JGo6XQmVvZ&sig=wQEsXWUIvBaKOBHD67a_EyLpwfo#v=onepage&q=posconflicto%20en%20colombia&f=false

Dalton R (2007). Miguel Marmol. Los sucesos de 1932 en El Salvador

Fajardo D (2009). Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su

- persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. Informe Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas)
- Fuentes H. (2004). Políticas de la memoria: el levantamiento de 1932 en El Salvador. *Revista Historia*.
- González L (1999) Estado, sociedad y economía en El Salvador.
- Gordon S. (1989). Crisis política y guerra en El Salvador. Editorial SIGLO XXI Editores.
- Guaraca (2015). Así nacieron las FARC
- Juárez Ávila, J. (2014). Historia y debates sobre el conflicto armado salvadoreño y sus secuelas. Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos.
- Lederach J (1998). Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas
- Martín Baro I (1981). La guerra civil en El Salvador. Disponible en:
<http://www.uca.edu.sv/coleccion-digital-IMB/wp-content/uploads/2015/12/1981-La-guerra-civil-en-El-Salvador.pdf>
- Martínez J (2015). El Salvador y Guatemala: espejos para Colombia. Disponible en:
<http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/5565-procesos-de-paz-encentroamerica-el-salvador>.
- Menjívar L (2016). El proceso y los mecanismos de acumulación originaria (1864-1897).
- Ministerio de Economía de El Salvador (2014). El Salvador: Estimaciones y proyecciones de Población. Disponible en
<http://www.digestyc.gob.sv/index.php/novedades/avisos/540-el-salvador-estimaciones-yproyecciones-de-poblacion.html>. Consultado el 10 de marzo de 2016
- Ministerio de Educación de El Salvador (1994). Historia de El Salvador Tomo I. Disponible en:
https://www.mined.gob.sv/descarga/cipotes/historia_ESA_TomoI_0_.pdf
- Moodie E (2012). Es peor que la guerra: Historias de crimen en la posguerra y recuerdos de

- la guerra en El Salvador. Las figuras del enemigo: Alteridad y conflictos en Centroamérica, 235 – 246.
- Orozco A (2005). Sobre los límites de la conciencia humanitaria. Dilemas de la paz y la justicia en América Latina
- Peña F & Alvarado J (2014). Retazos del “Maravilla” de la Radio Venceremos. Disponible en <https://elfaro.net/es/201408/noticias/15828/Retazos-del-Maravilla-de-la-Radio-Venceremos.htm>
- Pérez (2010). Los derechos humanos, el terrorismo y la lucha contra el Terrorismo
- Productora Periodista Libre [Periodista Libre] (2016). Documental Farabundo Martí. [Archivo de video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=VWeLcSbqrAI>
- Programa Somos Defensores (2019). Somos defensores programa
- RedCepaz (2013). Paz y Seguridad: Dándole seguimiento a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica. Disponible en <http://red-cepaz.org/wpcontent/uploads/downloads/2013/05/Boletin-No.-5-RedCepaz.pdf>
- Salazar S (2012). Memoria y conflicto armado salvadoreño. Revista Identidades.
- Salvador S (2017). Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador. Disponible en: <http://biblioteca.utec.edu.sv/sitios/conflicto/index.php/1981/12/10/centenar-de-personas-mueren-en-masacre-el-mozote/>
- Thomas A (2001). El Salvador, 1932: los sucesos políticos. Editorial CONCULTURA.
- Ulloa A & Coronado S (2016). Extractivismos y postconflicto en Colombia: Retos para la paz territorial
- Valencia Agudelo & Ávila A (2016). Los restos del postconflicto
- Valencia Agudelo L (2018). La restructuración unilateral del acuerdo de paz. Disponible en

<https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-COMO-VA-LA-PAZ-1.pdf>

Vilas (1996). El fin del conflicto armado salvadoreño